MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

12308 *ORDEN de 26 de marzo de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 887/1990, promovido por don José Enrique Poole Pérez-Pardo.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 26 de septiembre de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 887/1990, en el que son partes, de una, como apelante, don José Enrique Poole Pérez-Pardo, y de otra, como apelada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional con fecha 5 de diciembre de 1989, sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación legal de don José Enrique Poole Pérez-Pardo, contra la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1989, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en recurso 317.287 de dicha Sección (Registro General 2.507/1988) formulado por aquella representación contra resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 18 de febrero de 1988, desestimatoria ésta de recurso de reposición promovido contra resolución de dicho Ministerio de fecha 20 de agosto de 1987, y confirmamos dicha sentencia; sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 26 de marzo de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987 «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

12309 *ORDEN de 30 de marzo de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.846/1988, promovido por don José María Félix Herrero San Miguel.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 23 de noviembre de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 1.846/1988, en el que son partes, de una, como demandante, don José María Félix Herrero San Miguel, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 29 de junio de 1988, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 7 de marzo de 1988, sobre devolución de cuotas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José María Félix Herrero San Miguel, contra la resolución denegatoria del recurso de alzada del Subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 29 de junio de 1988, sobre liquidación de cuotas por diferencia en la integración del Montepío de la AISS en MUFACE, debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho la resolución recurrida, sin hacer pronunciamiento sobre costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 30 de marzo de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

12310 *ORDEN de 27 de abril de 1992 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 899/1986, promovido por doña María Blasco Sequién.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 899/1986 en el que son partes, de una, como demandante doña María Blasco Sequién, y de otra como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 14 de marzo de 1986, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de mayo de 1985, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por doña María Blasco Sequién, profesora de enseñanza general básica en situación de jubilada, contra la resolución de 14 de marzo de 1986 del Ministerio de la Presidencia, que desestimó su recurso de reposición formulado contra el Acuerdo de la Comisión Nacional de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) de 22 de mayo de 1985 por el que denegó el reintegro de gastos de asistencia sanitaria por cuantía de 240.921 pesetas, reclamadas por asistencia vital, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas; sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de abril de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden ministerial de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad general de Funcionarios Civiles del Estado.

MINISTERIO DE CULTURA

12311 *ORDEN de 10 de abril de 1992 por la que se adquiere para la Biblioteca de Cataluña dos xilografías de Manolo Hugué, en subasta celebrada el día 9 de abril de 1992.*

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), del Patrimonio Histórico Español.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Adquirir para la Biblioteca de Cataluña, con cargo a sus fondos, los bienes muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada por Ansorena, Subastas de Arte, en Madrid, el día 9 de abril de 1992, con los números y referencias siguientes:

Lote número 45: Manolo Hugé. «Escuela de Interior». Xilografía. Numerada 7/50. medidas: 22,5 × 33 cms. por el precio de remate de veintidós mil (22.000) pesetas.

Lote número 178: Manolo Hugé. «Retrato». Xilografía. Numerada 12. Medidas: 24 × 19 cms. por el precio de remate de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Suman estas adquisiciones un total de setenta y dos mil (72.000) pesetas.

Segundo.-Para el abono a la sala subastadora de los precios de remate, más los gastos inherentes, así como para la custodia de los bienes subastados, el representante de la entidad de derecho público afectada, habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas que estime convenientes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de abril de 1992.-Solé Tura.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Archivos.

12312 *ORDEN de 10 de abril de 1992 por la que se adquiere para el Museo de Arte de Cataluña el óleo de Salvador Mayol titulado «Escena de la guerra de la Independencia», en subasta celebrada el día 9 de abril de 1992.*

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), del Patrimonio Histórico Español.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Adquirir para el Museo de Arte de Cataluña, con cargo a sus fondos, el bien mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada por Ansorena, Subastas de Arte, en Madrid, el día 9 de abril de 1992 con el número y referencia siguientes:

Lote número 149: Salvador Mayol. «Escena de la guerra de la Independencia». Oleo sobre lienzo/tabla. Medidas: 43 × 70 cms., por el precio de salida, ya que no hubo puja, de trescientas mil (300.000) pesetas.

Segundo.-Para el abono a la sala subastadora de los precios de remate, más los gastos inherentes, así como para la custodia de los bienes subastados, el representante de la entidad de derecho público afectada, habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas que estime convenientes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de abril de 1992.-Solé Tura.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Archivos.

12313 *RESOLUCION de 27 de abril de 1992, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrige error padecido en la resolución de 2 de abril de 1992 sobre ayudas complementarias a películas de especial calidad correspondientes a 1991 y composición del Jurado que ha de proponerlas.*

Padecido error en el texto remitido para publicación de la citada resolución de 2 de abril de 1992 insertada en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de fecha 24 de abril de 1992, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-2.º h) del Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, del Reglamento del «Diario Oficial del Estado», se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En la página 13.918, segunda columna, punto segundo, donde dice: Segundo.-Únicamente podrán ser beneficiarios de estas ayudas las películas españolas de largo metraje que reúnan las condiciones siguientes:

Que hayan sido estrenadas comercialmente en España durante el año natural de 1991.

Que hayan sido calificadas para su exhibición pública, con anterioridad al 29 de octubre de 1989, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1282/1989.

Que no sean susceptibles de acogerse a los beneficios previstos en el Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre. Debe decir:

Segundo.-Únicamente podrán ser beneficiarios de estas ayudas las películas españolas de largo metraje que reúnan las condiciones siguientes:

Que hayan sido estrenadas comercialmente en España durante el año natural de 1991.

Que hayan sido calificadas para su exhibición pública, con posterioridad al 29 de octubre de 1989, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1282/1989.

Que no sean susceptibles de acogerse a los beneficios previstos en el Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre.

En la misma página y columna, punto tercero, décima línea, donde dice: don Luis Urbel Castellano. Debe decir: don Luis Urbez Castellano.

Madrid, 27 de abril de 1992.-El Director general, Juan Miguel Larmet Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

12314 *ORDEN de 27 de marzo de 1992 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 59.382, interpuesto contra este Departamento por don José María Martos Villalobos.*

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 17 de diciembre de 1990 por la Sección Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 59.382, promovido por don José María Martos Villalobos contra resolución expresa de este Ministerio por la que se anula la convocatoria de 20 de septiembre de 1982 para la provisión por concurso libre de plazas de Jefes de Servicio y entre ellas la de Medicina Nuclear de la Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nieves» de Granada, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Castillo Ruiz en nombre y representación de don José María Martos Villalobos contra la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de enero de 1987 que desestimó el recurso de reposición formulado contra la de 1 de agosto de 1986 dictada en alzada y que a su vez había desestimado en 30 de enero de 1986 la reposición contra la de 14 de mayo de 1985 que anuló la de 20 de septiembre de 1982, debemos confirmar y confirmamos tales resoluciones administrativas por ser conformes a derecho, sin hacer expresa condena en costas.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 27 de marzo de 1992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el Director general de Servicios, Luis Felipe Paradelá González.

Ilmos. Sres. Secretario general para el Sistema Nacional de Salud y Director general de Recursos Humanos y Organización.

12315 *RESOLUCION de 22 de mayo de 1992, de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, sobre delegación de atribuciones en materia de administración y gestión del personal de las Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud.*

Asignadas a esta Dirección General las competencias sobre la administración, gestión y régimen disciplinario del personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social por el Real Decreto 897/1991, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 25), y conforme a lo previsto en el artículo 22, 5, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, procede acordar la delegación de determinadas facultades en distintas autoridades del Departamento y del Instituto Nacional de la Salud, a fin de lograr la mayor agilidad y eficacia en la tramitación y resolución de los distintos procedimientos administrativos.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Sanidad y Consumo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-El Subdirector general de Ordenación y Política de Recursos Humanos ejercerá, por delegación del Director general de Recursos Humanos y Organización, las funciones de programación, propuesta de ordenación y gestión central en materia de retribuciones de personal, respecto de los Recursos Humanos de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Salud.

Segundo.-El Subdirector general de Administración de Recursos Humanos ejercerá, por delegación del Director general de Recursos Humanos y Organización, y respecto al personal de la totalidad de las